

La agricultura: adelgazar o morir

EL campesino ha endurecido durante siglos su espalda y aguanta sin pestañear las inclemencias del tiempo, del gobierno y de los hados. Por eso sólo esporádicamente saca sus tractores a la carretera o efectúa marchas de protesta. Si el agricultor tuviera la tradición reivindicativa del obrero industrial y si las organizaciones agrarias tuvieran tanta fuerza como los sindicatos de otros sectores, la protesta campesina actual sería equiparable a las **jacqueries** (revueltas campesinas) de finales de la Edad Media.

Ya no podemos calificar la crisis agraria de coyuntural e incluso el calificativo de «estructural» le queda corto, porque afecta al propio ser del campesino y a sus posibilidades de subsistir. Si no nos diera miedo la ampulosidad del término, diríamos que el mundo agrícola se encuentra en una crisis ontológica, puesto que gran parte de nuestros agricultores se debaten entre ser y no ser. Dicen que el sino del capitalismo es progresar incesantemente en las crestas de crisis sucesivas. Puede que esta afirmación siga aún siendo válida para la industria, pero, desde luego, ha dejado hace tiempo de serlo para la agricultura. El sino de la agricultura española de finales de siglo es decrecer, adelgazar de forma sistemática y

predecible. Cuando se supere la recesión industrial con que comenzamos 1993, cuando se relance nuevamente la economía general, la agricultura seguirá encogiéndose, aquejada de males esenciales para los que no hay remedios que no sean traumáticos.

EL desarrollo de las economías modernas ha destruido las ideas fisiocráticas que aún pervivían en las cabezas de muchos: la tierra ya no es la máxima riqueza, ni siquiera la más segura, y la agricultura ya no es «la esencial actividad económica de todo país», sino que aporta porcentajes cada vez menores de la formación del PIB. Un Estado será rico y poderoso en la misma medida que reduzca el peso proporcional de su agricultura.

Lógicamente el número de personas y recursos empleados en la agricultura debe disminuir. Este irreversible proceso de **eliminación de agricultores** se ejecuta de varios modos: con presiones para que los mayores de 55 años cedan la propiedad y con incentivos para el abandono de tierras, para el arranque de viñas, la reducción de las cabañas, etc. El mundo agrario se siente sin razón de ser, sin motivación; se le paga más por dejar de trabajar que por trabajar, más por no producir que por producir. «Nos pagan el entierro, pero no por ello duele menos el morir», nos decía un agricultor. La pérdida del valor de la tierra en grandes zonas del país es alarmante. A ello hay que añadir el quebranto de los más ancestrales afectos que vinculan al agricultor con su heredad. Los que sólo cobran si arrancan la higuera y no si cogen higos se sienten humillados, obligados a reconocer que su predio y su sudor son nocivos para los demás. Los parados que genera el cierre de explotaciones engrosan las listas de población subsidiada.

La Comunidad Europea, desde la frialdad de Bruselas, está operando con bisturí de hierro y actúa como urgidora de la reducción del sector. Nadie en ello ha podido llamarse a engaño, puesto que en las laboriosas negociaciones de entrada se limitaron los cupos de producción de casi todos los cultivos. Fuera de Europa nuestra agricultura carece de horizonte y

dentro de Europa no tiene más opción que la de redimensionarse. Baste analizar someramente la PAC (Política Agrícola Común): la CE ha venido destinando el 60 por 100 de su presupuesto a la llamada **Europa verde** mediante los fondos FEOGA-GARANTIA y FEOGA-ORIENTACION. La intención es igualar las rentas agrarias con las de la industria y los servicios. Pero el empeño supera las fuerzas disponibles y sólo será alcanzable si se logra **mejorar la productividad agraria**. En esto la agricultura española tiene un largo camino que recorrer: la relación entre el número de agricultores y producción final es de las más desfavorables de la CE; el sobreequipamiento de tractores y maquinaria es desproporcionadamente alto (hay tractores que no llegan a trabajar 300 horas al año). Comparemos estos dos datos: Holanda recibe del FEOGA-GA 9.145 Ecus por cada activo agrario (agricultor equipado en condiciones de producir) y España, a la que se le aplican los mismos precios de garantía, recibe sólo 1.375 Ecus. Es evidente que nuestra baja productividad no puede mejorarse hasta los niveles holandeses incrementando la producción, porque los topes de producción subvencionada por la PAC (Política Agrícola Común) no son elásticos, antes al contrario, serán cada vez más rígidos. Resulta claro, por tanto, que la productividad ha de crecer necesariamente por el decremento de los recursos —capitales y personas— empleados en la agricultura.

EL marco general en el que obligatoriamente habrá de desenvolverse nuestra agricultura es el que hemos descrito, pero, si el presente es oscuro, las perspectivas son aún menos halagüeñas:

- En primer lugar, la Comunidad Europea, de cuyas subvenciones dependen directa e inmediatamente 54.000 puestos de trabajo ha marcado ya la tendencia a reducir el peso presupuestario que representa la PAC (60 por 100), con lo que los precios umbral y las condiciones de subvención se endurecerán.
- En segundo lugar, la agricultura apenas cuenta ni en el Acta Unica ni en el Tratado de Maastricht; del ulterior

desarrollo de la unión europea puede esperarse un esfuerzo igualatorio (cohesión), pero éste no actuará preferentemente sobre la agricultura, como ha sucedido hasta ahora, sino sobre algunas industrias y servicios, sobre todo las comunicaciones.

- *En tercer lugar, la gran batalla que se está librando entre la CE y el GATT amenaza con dejar fuera de la protección europea no pocos productos, particularmente las oleaginosas y gramíneas. La cerrada defensa que Francia hace de sus agricultores no ha encontrado el respaldo de sus socios comunitarios, y Bruselas terminará por aceptar alguna desprotección interior para que los productos europeos no sean penalizados en los mercados mundiales más prósperos.*

***EL** proceso al que está abocada la agricultura parece obedecer a planteamientos racionales poco modificables por la voluntad de ningún Gobierno concreto. El dolor y los dramas humanos que comporta este proceso abre las carnes de nuestra impotencia.*